

«Ataque frontal del Gobierno a nuestros pueblos y ciudades»

L. G. C.

MURCIA. El manifiesto propuesto por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura para esta concentración de Alcaldes por el Tránsito viene encabezado por las palabras 'Agua, consumo humano y empleo'. Arranca mostrando «nuestra más firme oposición a cualquier decisión que suponga el recorte de una sola de agua del Tránsito y ponga en riesgo el abastecimiento de agua a nuestros territorios, y con ello el presente y el futuro de millones de ciudadanos». Asegura el texto que no van a permitir «que se nos condene a la ruina, el desierto y la muerte».

Rechaza cualquier modificación «unilateral y teledirigida» de las normas que regulan el funcionamiento del acueducto y exigen al Gobierno y al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico «la paralización inmediata de cualquier medida que suponga una reducción injustificada de los caudales trasvasables». Al recorte que supone el plan de cuenca del Tajo y el cambio de las reglas de explotación, suman «el anuncio inserto en el plan de cuenca del Segura de reducir hasta su mitad los aprovechamientos subterráneos».

De igual forma, entre sus reivindicaciones al Miteco incluyen la creación urgente de una Mesa Nacional del Agua «en la que se aborde un gran pacto de Estado para poner en marcha un Plan Hidrológico Nacional».

Defiende el documento al que se pide que se adhieran los alcaldes y alcaldesas que «su funcionamiento ha permitido que 2,5 millones de habitantes tengan acceso regular y seguro al agua para consumo humano, agricultura e industria». Lo describen como «la única solución efectiva y asequible» para garantizar ese abastecimiento.

«Nadie nos ha regalado nada», ahonda el texto, que incide en que «se ha pagado hasta la última gota de agua». En concreto, señala que se ha abonado a las arcas del Estado para su distribución a las haciendas autonómicas de Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura un total de 578 millones de euros. A eso, los regantes añaden que tienen aún que seguir sufragando gastos de amortización y mantenimiento, que llegan a cerca de 12 millones de euros anuales.



La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, ayer, en el Pleno de la Asamblea. J. M. RODRÍGUEZ / AGM

Rubira defiende la ley del Mar Menor para frenar «el daño reputacional» al campo

Vox insiste en exigir su reforma para aprobar el Presupuesto de 2025, mientras PSOE y Podemos denuncian los incumplimientos

L. GIMÉNEZ

MURCIA. La ley del Mar Menor volvió protagonizar ayer buena parte del debate en la sesión de control al Gobierno regional en la Asamblea. Allí, la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, intervino para explicar el efecto que ha tenido esta norma de 2021 en la actividad agraria y ganadera en el Campo de Cartagena, a petición de Vox. La consejera afirmó que el Campo de Cartagena «es ejemplo de que se puede producir alimentos seguros y de calidad respetando el medio ambiente» y que «el sector agrícola ha sabido

adaptarse a una norma con la que muestran su responsabilidad y compromiso».

Para Rubira, la ley «se ha convertido en la mejor carta de presentación de las empresas del Campo de Cartagena en los mercados internacionales. Es la mejor defensa de nuestros agricultores y ganaderos frente a quienes les acusan de manera injustificada». Además de eso, recordó que «sin la norma la Región no podría estar justificando que se está cumpliendo en el Campo de Cartagena la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea».

Entre los aspectos positivos de la norma, señaló Rubira que «la Ley del Mar Menor ha frenado el daño reputacional de nuestros productos y hoy podemos seguir diciendo que somos la huerta de Europa».

La consejera también ofreció en la Cámara regional datos sobre la evolución del valor de las

exportaciones desde la entrada en vigor de la ley del Mar Menor. Señaló que desde 2019 se ha incrementado cerca de un 24 por ciento hasta llegar a los más de 3.500 millones de euros en 2024.

Sara Rubira también indicó que los agricultores del Campo de Cartagena son líderes en agricultura tecnificada y sostenible. «Más del 80 por ciento de las explotaciones utilizan tecnologías de precisión. Se ha implantado la fertirrigación, las sondas de humedad, se está implementando el uso de Inteligencia Artificial y mejorando los procesos productivos», añadió.

Desde Vox, grupo que había pedido la intervención de Rubira, Antonio Martínez Nieto volvió a situar la modificación de la ley como condición sin la cual no darán su voto a favor del proyecto de ley de Presupuestos regionales de 2025: «Si no hay reforma, no habrá Presupuestos», advirtió. Con esa

ley, consideró que «la agricultura del Campo de Cartagena tiene los días contados», y a eso añadió la ley para la personalidad jurídica de la laguna, que calificó de «bomba de relojería».

Por parte del Grupo Socialista, su diputado Manuel Sevilla, lamentó que «hoy Vox sigue señalando a la ley» y lo hace «con falta de respeto y engaños al sector agrario». Pero también criticó al Ejecutivo regional: «El Gobierno de López Miras ha sido incapaz de desarrollarla y cumplirla». Se refirió a la aprobación del plan de ordenación de la cuenca vertiente, del plan de actuaciones específicas o de actuaciones en puertos. «Es una auténtica irresponsabilidad que atenta contra el acuerdo alcanzado en 2021», afirmó el diputado del PSOE.

María Marín, la portavoz de Podemos-IU-Alianza Verde, recordó además que en la propuesta de reforma que presentaron y fue rechazada por PP y Vox proponían la creación de un fondo histórico de compensación para los agricultores y ganaderos que desarrollan su actividad en zonas vulnerables. «¿Por qué se empeñan que sean nuestros agricultores y ganaderos quienes, a la hora de adaptarse, asuman el coste?», se preguntó Marín.

En la misma línea que Rubira se pronunció el diputado del PP Jesús Cano, para quien las acciones del Gobierno de López Miras han demostrado que «sí posible aplicar una ley eficiente sin demonizar al sector».

Críticas de la oposición por la situación del Hospital Santa Lucía

Entre las diferentes preguntas orales a las que tuvieron que responder los miembros del consejo de Gobierno, lo hicieron a sendas preguntas de PSOE y de Podemos sobre la situación del Hospital Santa Lucía, de Cartagena, en con-

creto por el Servicio de Angiología y Cirugía Vascular. La portavoz del Grupo Socialista, Carmina Fernández, aseguró que lo que están viviendo los pacientes de ese servicio «es un auténtico desmantelamiento del servicio». «Los recortes del señor López Miras cuestan vidas en esta Región y lo sabemos bien en el Área II de salud», dijo por su parte la portavoz Morada, María Marín.

«Hay un problema serio en este especialidad porque faltan profesionales. Pero la atención en planta y la atención urgente está garantizada», respondió por su parte el consejero de Salud, Juan José Pedreño.

Otro consejero, el de Fomento, Jorge García Montoro, informó de que su departamento continúa con los trabajos para el nuevo decreto de 'Vivienda Asequible' que quiere impulsar.